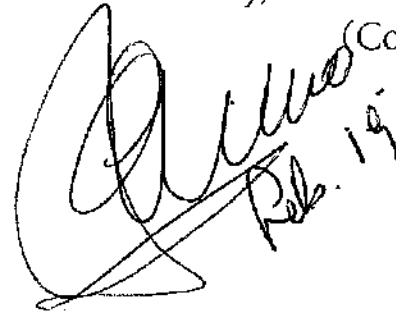


Cara Levey, Daniel Ozarow, Christopher Wylde  
(Compiladores)



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Wylde', is written over the printed name 'Christopher Wylde'. Below the signature, the date 'Feb. 19' is written.

**De la crisis de 2001  
al kirchnerismo:  
cambios y continuidades**

prometeo  
libros

De la crisis de 2001 al kirchnerismo : cambios y continuidades /  
Colin M Lewis ... [et al.] ; compilado por Daniel Ozarow ; Cara  
Levey ; Christopher Wylde. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de  
Buenos Aires : Prometeo Libros, 2016.  
300 p. ; 21 x 15 cm.

ISBN 978-987-574-765-4

I. Historia Argentina. 2. Historia Política. I. Lewis, Colin M II.  
Ozarow, Daniel, comp. III. Levey, Cara, comp. IV. Wylde, Christo-  
pher, comp.  
CDD 320.982

Cuidado de la edición: Micaela Magni  
Armado: María Victoria Ramírez  
Corrección: Marina Rapetti

First published in English by Palgrave Macmillan, a division of Macmillan  
Publishers Limited under the title "Argentina Since 2001 Crisis", edited by Cara  
Levey, Daniel Ozarow and Christopher Wylde. This edition has been translated  
and published under license from Palgrave Macmillan. The authors have asserted  
their right to be identified as the author of this Work.

© De esta edición, Prometeo Libros, 2016  
Pringles 521 (C1183AEL), Buenos Aires, Argentina  
Tel.: (54-11) 4862-6794 / Fax: (54-11) 4864-3297  
editorial@treintadiez.com  
www.prometeoeditorial.com

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723  
Prohibida su reproducción total o parcial  
Derechos reservados

## Índice

Agradecimientos de los Editores .....	9
Prólogo	
Colin M. Lewis .....	11
Introducción	
Un repaso a la crisis argentina de 2001: cambios y continuidades Cara Levey, Daniel Ozarow y Christopher Wylde.....	21

### PRIMERA PARTE

#### LA ECONOMÍA POLÍTICA DEL PERIODO (POST)CRISIS EN ARGENTINA

Capítulo 1	
Continuidad y cambio en la interpretación de los cambios rotundos: reexaminando la crisis argentina de 2001-2002 Christopher Wylde .....	47
Capítulo 2	
Crecimiento durante los años de la post-convertibilidad en Argentina: límites y dinámicas de largo plazo, 1960-2008 Cecilia T. Lanata Briones y Rubén M. Lo Vuolo.....	73
Capítulo 3	
La economía política del kirchnerismo y el complejo sojero. Cambios y continuidades Miguel A. Rivera Quiñones.....	97

### SEGUNDA PARTE:

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y LA MOVILIZACIÓN MASIVA ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL "QUE SE VAYAN TODOS"	
Capítulo 4	
"Es la economía, boludo" o ¿no es así? El rol de la crisis política en la movilización masiva: El caso de Argentina en el 2001 Olga Oruch.....	121

Daniel Ozarow, Cara Levey, Christopher Wylde (Compiladores)

Eduard Tagliaferro, "Kirchner es transición, pero no es progresismo", *Página 12*, Buenos Aires, (22 de agosto de 2005), <http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-55431-2005-08-22.html>.

Eduardo Videla, "Los vecinos frenaron una autopista," *Página 12*, Buenos Aires, (13 de mayo de 2008), <http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-104091-2008-05-13.html>.

Mario Wainfeld, "Cromañón, las sanciones", *Página 12*, Buenos Aires, (24 de abril de 2011).

Jeff Webber, *From Rebellion to Reform in Bolivia*, (Chicago, Illinois: Haymarket Books, 2011).

## Capítulo 7

### Revisitando la Argentina, 2001-2013. Del "que se vayan todos" a la exacerbación de lo nacional-popular

*Maristella Svampa*<sup>77</sup>

#### Cuatro momentos

Explicar cómo fue que los argentinos realizamos el pasaje del "que se vayan todos" a la exacerbación del modelo "nacional-popular" no es tarea fácil y merecería un largo análisis y una multiplicidad de niveles de lectura. No es lo que haremos aquí, ya que nos abocaremos a abordar solo algunos de sus aspectos, ligados a los cambios en los lenguajes movilizacionales, las disputas en términos de matrices ideológicas y el corrimiento y ampliación de las fronteras del conflicto social. Partimos de la base que si bien los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner estuvieron lejos de apostar a una refundación política, como sostienen sus defensores, su gestión tampoco puede ser interpretada en términos de continuidad lineal respecto de los años 1990. En realidad, las ambigüedades, la tensión entre continuidades y rupturas, en fin, los dobles discursos del kirchermismo, constituyen un hilo articulador, en un escenario en el cual paulatinamente se iría afirmando un modelo populista, un peronismo de clases medias en el contexto del Consenso de los *commodities*. Todo ello posee hondas resonancias en la política argentina.

<sup>77</sup> Una versión de este artículo fue publicada en 2011, en la Revista *Nueva Sociedad*.

Como es sabido, la tradición nacional-popular remite, para el caso argentino, al Movimiento Justicialista, fundado por Juan D. Perón en 1946. Pero lo "nacional-popular" es una categoría que reenvía a elaboraciones de Antonio Gramsci<sup>78</sup>. En nuestros análisis, retomamos en parte los aportes de Ipola y Portantiero (1994) respecto a su inflexión en América Latina, ligada a la alternativa populista. Para estos autores, el doble proceso que propone el populismo (constitución del pueblo y construcción de un orden estatal) requiere la inclusión de tres niveles de análisis: el de las demandas y tradiciones nacional-populares, el del populismo como movimiento de nacionalización y ciudadanía de las masas, y el populismo como forma particular del compromiso estatal<sup>79</sup>. En este marco, nos interesa hacer énfasis en la tradición nacional-popular a la cual definimos como una matriz político-ideológica que se inserta en la "memoria mediana" (las experiencias populistas de los años 30, 40 y 50), y tiende a sostenerse sobre el triple eje de la afirmación de la nación, el Estado redistributivo y conciliador, el liderazgo carismático junto a las masas organizadas —el pueblo—. Asimismo, si bien en términos generales la dinámica de lo nacional-popular se instala en la tensión entre un proyecto nacionalista revolucionario, conducido por el pueblo junto a su líder, y el proyecto de la participación controlada, bajo la dirección del líder y el tutelaje estatal, es esta última la forma histórica que suele adoptar lo nacional-popular, muy especialmente en su versión argentina.

Desde nuestra perspectiva, en la Argentina desde el año 2001 pueden establecerse cuatro momentos políticos, que se abren con acontecimientos de fuerte impacto social: en primer momento, la rebelión del 2001, caracterizada por una crisis generalizada y un nuevo ciclo de movilización social, cuyo punto de inflexión es la represión del

<sup>78</sup> La categoría aparece en los *Cuadernos de la Cárcel*, definida como "voluntad colectiva" y asociada a la "reforma intelectual y moral", ambas vistas como condiciones de posibilidad de un cambio histórico, a través de un proceso de construcción de hegemonía. Ver Gramsci, 1971.

<sup>79</sup> Los autores analizan los últimos dos niveles. Desde nuestra perspectiva es necesario incluir el primer nivel de análisis, el de la tradición nacional-popular y sus sucesivas configuraciones. Por ello utilizamos aquí el concepto de "matriz", que definimos como "aquellas líneas directrices que organizan el modo de pensar la política y el poder, así como la concepción del cambio social". Sin embargo, más allá de su evidente importancia, hay que señalar que la matriz nacional-popular es una de las que recorre el campo de las organizaciones populares en América Latina (De Ipola y Portantiero, 1994).

Puente Pueyrredón (2002); el segundo momento, la asunción presidencial de Néstor Kirchner (2003), que generó un nuevo escenario político, interpelando fuertemente a la sociedad y a las organizaciones sociales movilizadas (la vuelta a la "normalidad", la emergencia de un discurso progresista "desde arriba" y el retorno —todavía tímido— de lo nacional-popular); y por último, un tercer momento se abre con el conflicto entre el gobierno nacional y los sectores agrarios (2008), y encuentra una doble inflexión con la aprobación de la Ley de Medios (2009) y la muerte repentina del ex presidente Néstor Kirchner (2010). Caracterizamos este tercer momento (2008-2010) como el de la exacerbación de lo nacional-popular y la tentativa de construcción de una hegemonía. Finalmente, el cuarto momento se abre con el inicio del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015), da cuenta de nuevas inflexiones de lo nacional-popular, asociado al rol central de las clases medias en la política argentina.

### Del "que se vayan todos" al surgimiento de un nuevo *ethos* militante

La crisis de hegemonía neoliberal que golpeó a la Argentina a fines de 2001 fue de gran envergadura, luego de diez años de políticas neoliberales que transformaron enormemente las estructuras sociales. Dichas transformaciones crearon un nuevo umbral desde el cual pensar la sociedad. Sentimiento y realidad coincidían en la desmesura de la crisis, visible en el hundimiento del marco económico que hasta ese momento había regido los destinos nacionales. La Argentina había tocado fondo: los sucesivos ajustes, el impensable corralito (congelamiento de depósitos bancarios), la ruptura en la cadena de pago y la multiplicación de las monedas locales en reemplazo de una moneda legal cada vez más escasa, tuvieron su respuesta social en la ola de saqueos, así como en la inolvidable noche de los cacerolazos del 19 de diciembre de 2001. Estas movilizaciones suscitaron la mayor represión desatada desde el poder desde la vuelta a la democracia, con más de 30 muertos y centenares de heridos. La renuncia del presidente Fernando De la Rúa y la sucesión de cuatro presidentes provisionales en dos semanas daban cuenta del alcance institucional de la crisis.

En aquel año 2002, "nuestro año extraordinario", parecía abrirse sin embargo una gran oportunidad histórica: la crisis de la hegemonía neoliberal, visible en la desarticulación de un modelo de dominación tenía su correlato en grandes movilizaciones sociales, las cuales ganaron las calles al grito de "que se vayan todos". En medio de la descomposición económica, la Argentina se transformaba en un laboratorio político-social, ilustrado por la multiplicación de focos de rebeldía, que manifestaban su no resignación, impugnaban las formas convencionales de representación política y buscaban recomponer molecularmente el vínculo social desde abajo. No eran pocos los que se hacían la pregunta acerca de quién de todos o qué espacio de articulación política "desde abajo" podía responder al déficit de legitimación con una propuesta de nueva institucionalidad. Lejos de ser un fenómeno porteño o reducido a las grandes ciudades, estos hechos tuvieron una fuerte dimensión nacional. Más aún, a lo largo de 2002 hubo juicios políticos y destituciones a intendentes en más de 30 localidades, en 15 provincias argentinas<sup>80</sup>.

Recordemos que, en los años 90, las políticas neoliberales habían producido una ampliación de las fronteras de la exclusión, delineadas principalmente por la problemática de la desocupación. En un contexto de empobrecimiento y de descolectivización de las clases populares, habían nacido las grandes organizaciones de desocupados (*piqueteros*), cuyos ejes centrales serían la acción directa (el corte de ruta o *piquete*), el trabajo comunitario en el barrio, el control de planes sociales otorgados por el gobierno y la democracia asamblearia. Estos actores tuvieron centralidad en el espacio político-social a partir de 1999 y muy especialmente en 2002, a través de las movilizaciones hacia la ciudad de Buenos Aires, con fuertes reclamos orientados al Estado. De modo que, vista desde abajo, la profunda crisis de 2001/2002, resultaría en el reforzamiento de las organizaciones de desocupados, así como en la emergencia de una multiplicidad de movilizaciones que apelaban a diferentes tradiciones político-ideológicas, tales como la matriz clasista ortodoxa, la populista (desconectada, en ese momento, del partido peronista) y la nueva narrativa autonomista, en esos tiempos una matriz en construcción. Muy especialmente esta última fue encontrando su expresión más acabada en las asambleas barriales de

<sup>80</sup> Hemos abordado el tema en Svampa (2011).

las grandes ciudades, así como en las organizaciones de desocupados independientes y numerosos colectivos culturales.

→ Estas tres matrices político-ideológicas estuvieron lejos de articularse. Para decirlo con una metáfora: 2002 fue el año en que el Antonio Negri de la "multitud" (2004) le ganó a Gramsci e incluso obtuvo una victoria pírrica frente a Lenin. En efecto, por un lado, la propuesta gramsciana de construcción de un bloque contra-hegemónico, promovida por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y sus aliados, no supo ni pudo jugar un rol importante en estos acontecimientos. Su accionar institucional se vio opacado por las acciones directas y la intensa visibilidad que cobraron tanto las organizaciones piqueteras que respondían a una matriz de la izquierda clasista como aquellas que reenviaban a una matriz autonomista. A fines de 2002, la CTA realizó un congreso nacional y estableció que era la hora de devenir un movimiento político-social, a la manera de la *Central Única dos Trabalhadores* (CUT) brasileña<sup>81</sup>. Sin embargo, a esa altura su propuesta ya era una suerte de vía muerta, que descansaba al costado de las formaciones principales, todavía en movimiento.

Por otro lado, la narrativa autonomista se había ido constituyendo en la piedra de toque de la emergencia de una nueva subjetividad militante, sobre todo entre los jóvenes y los críticos de las formas organizativas de la izquierda clasista. Aún si, como bien señalara Martín Bergel (2007), estas reclamaban una suerte de autonomismo "práctico" antes que teórico, dicha narrativa en construcción contaba con *movimientos-faros*, entre ellos, el Movimiento de Trabajadores Desocupados de Solano (presentado por la vía del Colectivo Situaciones) y exhibía ciertos autores de culto (Negri y Holloway). Un nuevo *ethos* militante, caracterizado por el rechazo a la "democracia delegativa" (O'Donnell 1994), fue surgiendo al calor de aquellos primeros meses en los que se mezclaban sentimientos de temor e incertidumbre frente a la ausencia de referencias institucionales, y una apertura de cara a las nuevas experiencias políticas. Las asambleas barriales mostraban que la crisis era total: como por arte de magia, estas destituían la totalidad

<sup>81</sup> Como sostiene Armelino (2011), la CTA lanzó el denominado *Movimiento Político, Social y Cultural*, con la idea de coordinar la movilización colectiva de 2001-2002 hacia nuevas formas de participación política. Se esperaba, así, aportar a la crisis de partidos y a la democratización del sistema representativo de gobierno.

de poderes causales previos (partidos políticos, sindicatos, etcétera), incluyendo aquellos que pudieran invocar un saber profesional o cualquier suplemento de sentido que apuntara a la expropiación de la voluntad política asamblearia o pudiera ser portador de una tentación hegemónica. Había lugar para todos, inclusive los profesionales, los de la clase media y hasta los 'ciudadanos comunes'<sup>82</sup> a condición de que esos lugares significaran la igualdad sin más.

Pero las dinámicas socio-políticas siempre son recursivas y el devenir autónomo del asambleísmo urbano, disminuido en términos de participación, desgastado por las interminables discusiones políticas y las escisiones, terminó acorralado por las demandas de normalidad institucional que provenían de una sociedad exhausta por la crisis. Asimismo, la represión del Puente Pueyrredón, ocurrida el 26 de junio de 2002, resultado de una operación conjunta de la Policía Federal, la Gendarmería y la policía de la provincia de Buenos Aires, fue un punto de inflexión. Esta asestó un golpe duro a las organizaciones piqueteras, sobre todo las autónomas, de donde provenían Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, los dos jóvenes asesinados<sup>83</sup>. El temor a una gran represión, evocando los horrores de la pasada dictadura militar, abrió una gran herida en las organizaciones movilizadas, que encontraría una acelerada confirmación en los sucesivos desalojos y represiones que caracterizaron el final de gobierno provisorio de Duhalde (2002-2003).

Asimismo, como señala Melina Vásquez (2010), el repudio a la represión del Puente Pueyrredón constituyó un disparador para el ingreso de nuevas capas de jóvenes militantes de clases medias, que se acercaron a las organizaciones piqueteras autónomas, buscando tejer lazos con los sectores populares excluidos. Se consolidaba así una nueva generación militante, articulada sobre la territorialidad, el activismo asambleario, la demanda de autonomía y la horizontalidad de los lazos políticos: un nuevo activismo territorial que iba del centro de la ciudad hacia la periferia, en especial, hacia los lugares más pobres del Conurbano Bonaerense<sup>84</sup>. El desafío tenía como corolario la necesidad de la construcción "desde abajo" y la exigencia de la articulación entre

<sup>82</sup> Ver capítulo de Onuch sobre 'los ciudadanos comunes.'

<sup>83</sup> Ver capítulo de Dinerstein.

<sup>84</sup> En este caso, con territorialización nos referimos al fenómeno de desplazamiento del activismo de la fábrica al barrio. En años posteriores, con la emergencia de nuevos

política y ética. "Maxi y Darío", que en definitiva habían ofrendado sus vidas en el peor momento de la crisis, aparecían como "modelos ejemplares" para esa nueva juventud militante.

Este nuevo *ethos* militante, anclado en el activismo asambleario y territorial, más autocrítico y por ende mucho menos hiperbólicamente autonomista que en 2002, se difundió en otros espacios organizacionales, entre ellos, en los numerosos colectivos culturales que comenzaron a desplegarse en el campo de video-activismo, el periodismo alternativo y la educación popular, entre otros. Se expresó incluso en el sindicalismo de base, que comenzó a manifestarse a partir de 2003/2004, con el mejoramiento de los índices económicos, y en el marco de la profundización de la precariedad. Surgían así nuevas capas de jóvenes delegados sindicales que luego de tantos años de descreimiento, habían revalorizado la acción gremial como herramienta de lucha.

Esta subjetividad militante se haría presente también en las nuevas asambleas de vecinos contra la megaminería a cielo abierto. La primera de ellas, en Esquel, en la provincia patagónica de Chubut, había nacido en 2002, en pleno fervor asambleario. A partir de 2004, las asambleas ciudadanas se irían multiplicando a lo largo de quince provincias, amenazadas por la expansión vertiginosa de la minería transnacional. No es exagerado afirmar que estas asambleas, de carácter interclasista, pero con un protagonismo de las clases medias, son las fieles herederas de ese *ethos* militante forjado en 2001. En 2006 surgió la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), espacio autonomista en el cual convergen las diferentes asambleas de base.

En suma, no hubo una reconstitución política desde abajo, pero el tejido social organizativo cambió, expresado tanto por la presencia de la matriz clasista como la expansión de un *ethos* militante autonomista, con fuerte formato territorial y aspiraciones de democratización. Más aún, la emergencia de una nueva generación —la de 2001, abarcó un registro amplio de organizaciones, desde los desocupados, expresiones organizativas de clase media, nuevos delegados sindicales y asambleas contra la minería transnacional.

movimientos socio-ambientales, la noción misma de territorialidad se tornará más compleja y multidimensional.

## La vuelta a la normalidad y la emergencia, de un discurso nacional-popular

El devenir nacional-popular del kirchnerismo fue paulatino. A principios de 2003, el declive de las nuevas movilizaciones así como la fragmentación de las organizaciones de desocupados, fueron diluyendo la expectativa de una recomposición política “desde abajo”, para dar paso a una fuerte demanda de orden y normalidad. En este sentido, apenas asumido, Kirchner se hizo eco de este mensaje social, como aparecía ilustrado en su consigna “Por un país en serio, por un país normal”<sup>85</sup>.

Una de las características de ese momento inicial fue la configuración de un discurso progresista “desde arriba”, facilitada por la emergencia de un espacio progresista a nivel regional, y el retorno -todavía tímido- de lo nacional-popular, de la mano de la revalorización del rol del Estado. Recordemos que los primeros gestos de Kirchner contribuyeron a reconfigurar el campo político desde la esfera institucional: los cambios positivos en la Corte Suprema de Justicia<sup>86</sup>, la asunción de la política de derechos humanos como política de Estado respecto de los crímenes cometidos por los militares durante la última dictadura militar, la reivindicación de una cierta autonomía de la política respecto de la economía, en el marco del *default* y, por último, la opción por una política económica heterodoxa, signaron sus primeros pasos. Estos gestos interpelaron a un conjunto de organizaciones sociales, entre las que se destacaron diversos organismos de derechos humanos, entre ellos, Madres, Abuelas de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S (compuesta por hijos de desaparecidos), que habían sido golpeados duramente por las sucesivas leyes de impunidad (dictadas por Alfonsín y Menem) y varias organizaciones de desocupados, ancladas en la tradición nacional-popular, pero desvinculadas -hasta ese momento- del Partido Justicialista.

Hacia fines de 2004, con la rápida consolidación del gobierno de Néstor Kirchner, el escenario político ya había sufrido grandes recon-

<sup>85</sup> Del discurso de inauguración de Néstor Kirchner, 25 de mayo de 2003 Ver [http://www.casariosada.gov.ar/index.php?option=com\\_content&view=article&id=24414&catid=28:discursos-ant](http://www.casariosada.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=24414&catid=28:discursos-ant)

<sup>86</sup> Los jueces menemistas fueron retirados por Néstor Kirchner y reemplazados con unos otros jueces respetados.

figuraciones: sea a través de la integración, sea a través del reflujo y el disciplinamiento, las organizaciones de desocupados ligadas a las organizaciones de la izquierda clasista así como aquellas pertenecientes a la izquierda independiente y autónoma, fueron resignando la centralidad que tuvieron en la cartografía de las resistencias. Hubo también cambios importantes en las condiciones económicas internas, luego de la devaluación de la moneda argentina y la salida de la convertibilidad, ya visibles desde mediados de 2003. La Argentina de la post-convertibilidad comenzaba a ser asociada con la reactivación económica e industrial. Se operó entonces un primer corrimiento de las fronteras del conflicto social. El contexto de crecimiento económico, sin redistribución y con un fuerte aumento de la precariedad, marcó el retorno de la conflictividad sindical, de la mano de la tradicional Confederación General del Trabajo (CGT), luego de una década de desmovilización y de una reorientación hacia un sindicalismo de tipo empresarial.

Sin embargo, pese a que en el periodo de post-convertibilidad la reactivación industrial fue notable, en términos comparativos esta ha sido más bien acotada. Ciertamente, el desempeño del sector industrial, con relación a la creación de puestos de trabajo, fue positivo: en el año 2007 la industria llegó a ocupar el 36% y un 7% más de trabajadores que en el 2002. Pero este proceso de reindustrialización fue favorecido por el esquema macroeconómico de “tipo de cambio alto y competitivo” -sostenido por intervenciones del Banco Central. Más allá de esto, las políticas activas hacia la industria fueron escasas y no se formuló una estrategia de industrialización inclusiva y sustentable. Por ende, la reactivación económica y manufacturera que tuvo lugar partir de 2003 no logró revertir los alcances de los años de desindustrialización neoliberal (Azpiazu y Schoor, 2010). Por otro lado, la dinámica salarial de los últimos años se centró en la recuperación de la participación en las ganancias que los trabajadores habían perdido en 2001, y no ha superado ese techo; lo cual explica que, pese a que el índice de desocupación es bajo, existe una proporción importante de la población asalariada que se encuentra bajo la línea de la pobreza.

Por último, la supuesta “vía industrial” debe ser relativizada, en la medida en que el crecimiento de la economía aparece ligado a la exportación de *commodities* (principalmente, la soja y sus derivados),

favorecido por los altos precios internacionales. Al igual que en otros países latinoamericanos, en los últimos diez años la Argentina transitó del "Consenso de Washington" al "Consenso de los *commodities*" (Svampa, 2013). Estos cambios en la división global del trabajo han ido configurando en la región latinoamericana un estilo neodesarrollista, de corte extractivista, basado en la apropiación y sobreexplotación de los recursos naturales no renovables, por encima de las evidentes diferencias políticas o los signos ideológicos específicos de cada gobierno. Agreguemos a esto, el efecto de reprimarización de las economías, agravado por el ingreso de China, país que de modo acelerado va imponiéndose como socio desigual en lo que respecta al intercambio comercial con la región. En otros términos, más allá de la retórica industrialista en boga, en nombre del nuevo Consenso de los *commodities* y de sus "ventajas comparativas", los diferentes gobiernos tienden a aceptar como "destino" el orden geopolítico mundial, el cual históricamente ha reservado a América Latina el rol de exportador de Naturaleza, sin considerar sus impactos desestructurantes sobre la economía (la tendencia a la reprimarización de la economía y las nuevas formas de la dependencia), ni sobre la población y los territorios (nuevas formas de dominación bajo la lógica de la desposesión).

Volviendo a la dinámica política nacional, durante el gobierno de Néstor Kirchner, los movimientos tácticos en busca de una identidad progresista se articularon sobre dos ejes mayores: la reivindicación de los derechos humanos como política de Estado y el latinoamericanismo. Sin embargo, también hubo un intento de construcción de una fuerza transversal progresista. Esta última tentativa, más bien errática y prontamente descartada, otorgaba un lugar a las organizaciones piqueteras deudoras de la matriz nacional-popular, que se integraron al gobierno bajo el nombre políticamente correcto de "organizaciones sociales". No obstante, en términos de figuras militantes, estas fuerzas no fueron capaces de generar una épica alternativa a la que presentaba la generación de 2001, nutrida en el ethos autonomista y la matriz clasista. Ciertamente algunas de las (ex)organizaciones piqueteras (Federación de Tierras y Viviendas, Barrios de Pie y Movimiento Evita) obtuvieron puestos dentro del Estado, sobre todo en el área social, pero como lo demuestra la investigación de Boyanovsky (2010), el vínculo que Kirchner entabló con ellas, fue más bien mezquino, plagado de idas

y vueltas, que parecían hablar de un no-reconocimiento pleno de parte del gobierno sobre el rol de éstas en el nuevo proceso. Desde nuestra perspectiva, mucho tuvo que ver con el rechazo y estigma que medios hegemónicos, clases medias y el propio gobierno habían contribuido a instalar, durante la fuerte puja que se llevó a cabo en el espacio público entre 2003 y 2004 contra las organizaciones piqueteras opositoras. Pero lo cierto es que ni la reivindicación de las luchas antineoliberales de la década del 90, ni la evocación de un *ethos* setentista alcanzaron para dotar de legitimidad a un actor social que en definitiva continuaba siendo visto por una gran parte de la sociedad como "clase peligrosa", "lumpenproletariado residual" o simplemente, como una expresión del clientelismo de izquierda, amparado por el nuevo gobierno.

En realidad, ya en su primera etapa, el kirchnerismo optó por apoyarse sobre los sectores sindicales tradicionales. En 2004 la Confederación General de Trabajadores (CGT) se unificó bajo el liderazgo de Hugo Moyano, jefe del sindicato de los camioneros, quien durante los años 90 encabezó el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), nucleamiento sindical peronista donde conviven las apelaciones a la tradición nacional-popular con un sindicalismo de corte empresarial. El fuerte crecimiento que experimentaron los servicios, la cuasi-desaparición del sector ferroviario como transporte de pasajeros, luego de la privatización y cierre de ramales, el desarrollo del comercio regional, los subsidios del gobierno nacional y, por último, el transporte de soja y otras semillas hasta los puertos, para el mercado externo, catapultaron a los sectores transportistas a la cima del poder sindical.

Como hemos anticipado, una de las contracaras de este fenómeno ligado a las cúpulas sindicales fue el aumento molecular de las luchas protagonizadas por comisiones internas, que lograron poner de manifiesto una pugna intrasindical entre sectores burocráticos y la nueva generación de delegados, muchos de ellos hijos de las revueltas del 2001 y ligados a organizaciones y partidos de izquierda. Entre estas luchas, se destacan aquellas del sector de servicios y transporte (empresas de call-center, subterráneos de Buenos Aires, empleados del Casino de Buenos Aires, entre otros), golpeados por el aumento de las condiciones de precariedad laboral.

## Discursos binarios y exacerbación de lo nacional-popular

El conflicto que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, apenas asumido, tuvo con los productores agrarios, en 2008, fue la piedra de toque para actualizar de manera plena el legado nacional-popular. Recordemos que este se originó a raíz de un aumento de las retenciones a las exportaciones agrarias, que pasaron del 35% al 44%. De manera inédita, el frente agrario agrupó tanto a las grandes organizaciones (entre ellas, la tradicional Sociedad Rural Argentina (SRA), que nuclea a los grandes propietarios), como a aquellos representantes de los pequeños y medianos productores (Federación Agraria Argentina - FAA), quienes llevaron a cabo una serie de bloqueos de rutas (paros agrarios y *lock-out*), que dejaron al país al borde del desabastecimiento durante cien días.

Dicho conflicto puso de manifiesto la importancia de las transformaciones agrarias ocurridas en la última década y el lugar del modelo sojero en la actual estructura económica argentina<sup>87</sup>. Arrojó a la arena política a los diferentes actores del nuevo modelo agrario, develando su entramado complejo y sus rasgos mayores (la tendencia al monocultivo de soja). Otorgó visibilidad a algunos de los socios "menores" (los pequeños productores, que sostenían los cortes de ruta), al tiempo que iluminó parcialmente la situación de los excluidos del mismo, esto es, las comunidades campesinas e indígenas, que sufren el desplazamiento y despojo de sus tierras a causa de los desmontes y plantaciones de cultivos transgénicos, en especial en el norte argentino.

La dinámica virulenta que adquirió el conflicto económico hizo que este adoptara claras dimensiones políticas: tanto la respuesta inflexible del gobierno (llamándolos "piquetes de la abundancia") como la rápida reacción de ciertos sectores de clase media porteña, que salieron a la calle a apoyar a los sectores agrarios, cuestionando el estilo político autoritario del gobierno, sirvieron para reactualizar viejos esquemas de carácter binario, que atraviesan la historia argentina y han anclado fuertemente en la tradición nacional-popular: Civilización o Barbarie; Peronismo o Antiperonismo; Pueblo y Antipueblo. No importa ya si el gobierno mostró escasa flexibilidad para negociar con las diferentes partes, cimentando de este modo el carácter monolítico del bloque

<sup>87</sup> Ver capítulo de Rivera-Quñones.

opositor, o si las clases medias volvieron a manifestar inveterados prejuicios racistas y clasistas en relación a las bases populares peronistas. El conflicto fue un parteaguas: en ese marco, el gobierno logró la adhesión activa de un grupo de intelectuales y académicos de corte progresista, "Carta Abierta", quienes salieron en defensa de la institucionalidad y realizaron una lectura de las movilizaciones agrarias en términos de "conflicto destituyente".

Meses después, el gobierno recobró la iniciativa y el esquema binario de lectura se reforzó notoriamente con el conflicto generado por la Ley de Medios, que esta vez lo enfrentó directamente con el multimedio Clarín (quien, hasta antes de la disputa con los sectores agrarios, había sido beneficiado por las políticas del kirchnerismo). Los debates en torno de la nueva ley audiovisual, en 2009, suscitaban también la adhesión entusiasta de numerosos periodistas, artistas y sectores educativos, que hasta ese momento habían mantenido más bien una relación de apoyo tácito o de consenso pasivo en relación al kirchnerismo.

La muerte repentina de Néstor Kirchner en octubre de 2010 terminó de abrir por completo las compuertas al populismo, en su clásica versión estatalista. La conmoción que produjo la pérdida del político que marcó la escena argentina de la última década, así como el temor, por parte de ciertos sectores sociales, de ver desvanecidas las conquistas llevadas a cabo por el gobierno, constituyeron un punto de inflexión. Este fenómeno conllevó dos consecuencias mayores: por un lado, consolidó el discurso binario como "gran relato" refundador del kirchnerismo, sintetizado en la oposición entre un bloque popular y sectores de poder concentrados (monopolios, corporaciones, gorilas, antiperonistas). Como en otras épocas de la historia argentina, los esquemas dicotómicos, que comenzaron siendo principios reductores de la complejidad en un momento de conflicto, terminaron por funcionar como una estructura de inteligibilidad de la realidad política. Por otro lado, amplió el arco de alianzas, a partir de la incorporación explícita de la juventud —que había tenido notoria presencia en las exequias de Kirchner—. Agrupaciones pequeñas como "La Cándida" y otras similares comenzaron a multiplicarse por todo el país, al compás de una doble militancia, tanto desde altos puestos del aparato del Estado

como desde las bases, marcadas por un activismo virtual antes que territorial, desde blogs, Twitter y redes sociales.

Una cuarta etapa se abre con el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, quien en octubre de 2011 se impuso por el 54% de los votos y recuperó la mayoría parlamentaria en el Congreso, que el oficialismo había perdido en 2009. Sin embargo, en los últimos años de su mandato el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sufrió un gran desgaste, lo cual se ha evidenciado en rupturas de alianzas sociales. Por un lado, se operó el quiebre con el sindicalismo peronista representado por Hugo Moyano, jefe de la CGT y aliado principal del gobierno desde 2003. Así, la base sindical del kirchnerismo quedó reducida a un sector de la CTA, liderado por Hugo Yaski, ligado a sectores medios (maestros y empleados estatales). Por otro lado, hubo un nuevo quiebre con sectores de las clases medias, tal como lo mostraron tres masivas movilizaciones realizadas entre septiembre de 2012 y abril de 2013, que pusieron de relieve un gran descontento en torno a temas de índole institucional (rechazo a la posibilidad de una re-reelección de la presidenta, contra la corrupción y en defensa de una justicia independiente), así como contra la inseguridad y el control cambiario establecido por el gobierno<sup>88</sup>. Por último, el fuerte encapsulamiento del poder ejecutivo fue configurando un modelo extremo de presidencialismo, visible también en el conflicto creciente entre los poderes del Estado, a partir del avance del poder ejecutivo sobre el poder judicial<sup>89</sup>.

En este contexto que muestra la consolidación de los cuadros de La Cámpora en el aparato del Estado, una fuerte concentración de poder en el ejecutivo y una crisis del ala sindical, el kirchnerismo fue acentuando su carácter clasemediero, en el cual las clases subalternas, entre ellos, incluso los sectores sindicales, aparecen como los convidados de piedra. En definitiva, el kirchnerismo terminó por convertirse en un populismo de clases medias que pretende hablar en nombre de

<sup>88</sup> Para prevenir la fuga de capitales, el gobierno argentino llevó a cabo una política de control (cepo) cambiario a partir del 2012 que restringía la venta y compra de dólares. Esta medida creó un mercado paralelo del dólar.

<sup>89</sup> El poder ejecutivo presentó un proyecto de reforma judicial, para 'democratizar la justicia'. Esta serie de leyes fue aprobada por el Congreso argentino en abril del 2013. Sin embargo, la Corte Suprema declaró la reforma judicial "inconstitucional" en junio del mismo año.

las clases populares, vía por la cual también busca descalificar a otros sectores de clases medias movilizadas, (a los cuales se identifica con "la derecha").

Como consecuencia de ello, Argentina comenzó a transitar un escenario de polarización político-social, comparable al de otros países latinoamericanos (como es el caso venezolano). Primero, mientras los casos de Venezuela y Bolivia pueden ser considerados como populismos plebeyos o de clases populares, visible en el empoderamiento político y social de los sectores subalternos<sup>90</sup>, en Argentina hay un predominio claro de sectores de clases medias, más allá de las referencias simbólicas a los sectores populares. Segundo, a diferencia de las experiencias de Bolivia, Venezuela y Ecuador, el kirchnerismo aparece muy preocupado por la tarea de la refundación de las instituciones (y por ende, de las aspiraciones de democratización de numerosos sectores subalternos), que estos gobiernos encararon a través de diferentes procesos de reforma constitucional. Tercero, el modelo kirchnerista presenta numerosos elementos tradicionales (la alianza con los sectores más empresariales del sindicalismo, los intendentes del Conurbano Bonaerense y gobernadores que responden a una fuerte matriz autoritaria), vinculados al legado organizacional del partido peronista. Esta inflexión no es solo el resultado de una relación histórica o de un vínculo perdurable entre el partido peronista y organizaciones sociales, sino que responde a una cierta concepción del cambio social y, por ende, de la propia construcción de hegemonía, bajo el modelo de la "participación controlada" de los diferentes sectores organizados, en el cual se destaca la subordinación de éstos a la figura del líder y la tutela estatal.

### La ampliación de las fronteras de los conflictos sociales

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner perdió la pulseada política con los sectores agrarios en el Parlamento, en julio de 2008, y atravesó un periodo de zozobra, visible en la derrota en las elecciones parlamentarias en 2009. Sin embargo, la recomposición fue rápida, gracias a una conjunción de políticas activas llevadas a cabo desde el

<sup>90</sup> En ese sentido se acercan más al populismo del primer gobierno de J. D. Perón (1945-1955) que produjo una redistribución del poder social.

Estado, entre ellas, la nueva Ley de Medios<sup>91</sup>, la Ley de Matrimonio Igualitario, la nacionalización del sistema previsional y, sobre todo, la Asignación Universal por Hijo, una medida promovida desde hacía años por partidos y organizaciones sociales progresistas opositoras, que la presidente sancionó por decreto.

En segundo lugar, las acciones del nuevo sindicalismo de base, ligado a la matriz clasista, encontraron un punto de inflexión dramático. En octubre de 2010, la puja intersindical se cobró una víctima fatal: Mariano Ferreyra, un militante de izquierda, perteneciente a un partido trotskista (Partido Obrero) fue asesinado en el marco de una protesta que exigía la incorporación con plenos derechos de sectores tercerizados en los servicios ferroviarios. Dicho crimen, que llevó al encarcelamiento de uno de los gremialistas más poderosos de la CGT, puso al descubierto la oscura trama existente entre precarización, lógica empresarial, patotas sindicales y apoyos del gobierno nacional, colocando fuertes interrogantes sobre la calidad y la extensión del modelo laboral promovido por el gobierno. A ello se sumó la ruptura de la CTA: el pluralismo ideológico de la central encontró escollos insalvables en la creciente división interna entre sectores oficialistas y aquellos opositores al gobierno.

Por otro lado, aunque las estadísticas de la protesta suelen subrayar que, a diferencia de los años 90, en los doce años que el kirchnerismo estuvo en el poder, disminuyeron las impugnaciones al modelo económico y volvieron a emerger los pedidos típicos de la movilización obrera por salarios y condiciones de trabajo, esta lectura es parcial. La misma se ha visto interpelada por la explosión de conflictos territoriales vinculados a la disputa por la tierra y la vivienda, así como por las luchas en defensa del territorio. Estos conflictos reenvían tanto a una demanda acumulada de viviendas, como al creciente desplazamiento que sufren masas rurales y urbanas, pueblos originarios y campesinos, a raíz de la implementación de modelos productivos ligados al agro-negocio, megaemprendimientos turísticos y minería a cielo abierto y la explotación de gas no convencional (*fracking*) entre otros, que exigen el acaparamiento de tierras. Estas problemáticas adoptan dimensiones más dramáticas si hacemos referencia a las organizaciones y pueblos indígenas (como la comunidad Qom, en la provincia nor-

<sup>91</sup> Ver capítulo de Fischer.

teña de Formosa), quienes han protagonizado en años recientes una sostenida resistencia a los desalojos, así como han sufrido diferentes formas de criminalización y represión, incluyendo el asesinato. Basta con recorrer el informe de James Anaya, el relator especial de las Naciones Unidas, sobre los pueblos indígenas en Argentina (2012), para advertir la gravedad de la situación: en este se subrayan el impacto ambiental y cultural, la falta de cumplimiento del convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (que exige la consulta previa, libre e informada en territorios indígenas), el incumplimiento de la Ley 26160, que ordena relevar los territorios indígenas y suspende los desalojos (los cuales continuaban y de modo violento); la dificultad en el acceso a la justicia, lo cual se traduce por el fallo sistemático de los tribunales provinciales a favor de las corporaciones transnacionales y de los grandes propietarios privados; en fin, la criminalización y represión de la protesta.

Asimismo, ligado a estos procesos recientes, ya hemos mencionado la emergencia de asambleas contra la megaminería transnacional. Al igual que en otros países latinoamericanos, como Perú, Ecuador y Guatemala, este tipo de movilizaciones socio-ambientales se localizan en pequeñas y medianas localidades de la zona cordillerana y precordillerana. Pese a las asimetrías existentes, entre 2003 y 2008, dichos movimientos han logrado la sanción de leyes de prohibición de la minería a cielo abierto (con algún tipo de sustancia contaminante) en siete provincias argentinas. En este campo, uno de los avances más importantes fue la sanción de una ley nacional de protección de glaciares, en septiembre de 2010, luego de que la misma fuera vetada por la presidenta en 2008, lo cual puso de manifiesto la influencia de los grandes intereses mineros (entre ellos, de la compañía canadiense Barrick Gold, cuya actividad se vería comprometida por la aplicación de la ley)<sup>92</sup>.

<sup>92</sup> La Ley de Protección de Glaciares prohíbe cualquier actividad extractiva en un 1% del territorio nacional (zona de glaciares y periglaciares) y su sanción fue el producto de una acción transversal realizada por organizaciones ambientalistas, asambleas ciudadanas, sectores políticos de centro izquierda e intelectuales, en medio de un intenso lobby minero. Sin embargo, la ley fue judicializada y su reglamentación continúa la escasa voluntad del gobierno nacional y las diferentes instituciones del Estado para hacerla efectiva, permitiendo así el continuo avance de los proyectos mineros.

## El peronismo como hegemonía

Varias hipótesis recorrían el escenario político en los primeros años del siglo XXI argentino. Para algunos era previsible que las formas políticas que se multiplicaron a partir de diciembre de 2001 no podrían sostener un eterno estado de efervescencia y fracasarían en su intento de recomposición política desde abajo. Como hemos señalado, parte de ese fracaso se debió también a la tentación hegemónica de la izquierda clasista como a la escasa aspiración de construir una nueva institucionalidad estatal que expresaba el ethos autonomista.

Aún así, en medio de la crisis, pocos auguraban una rápida recomposición política desde arriba. Aunque el sistema político partidario no había estallado, frente a la aguda crisis de representación se apuntaba a un cierto recambio de las élites políticas. Esto no sucedió finalmente, pero tanto el colapso de la coalición gobernante en 2001 (la Alianza entre la tradicional Unión Cívica Radical (UCR) y sectores progresistas), como la resolución posterior de la crisis, fortalecieron la hipótesis de que el peronismo era el único partido político que podía asegurar gobernabilidad, en medio de una sociedad atravesada por múltiples conflictos. Sin embargo, en los primeros años del nuevo siglo, bien podía pensarse que mucha agua había corrido bajo el puente peronista y que el neoliberalismo había dejado marcas indelebles en la memoria militante de los argentinos. Más simple: parecía inconcebible que luego del notable giro neoliberal del peronismo en los años 90, lo cual se tradujo por una profunda crisis de la militancia política y un gran desdibujamiento en términos de contracultura política, este pudiera reactualizar y potenciar los componentes nacional-populares, visibles en la revaloración del Estado, la centralidad del líder y el rearmado de un aparato militante (sindical, social, político y cultural).

En contraste con Eduardo Duhalde y su fórmula *default más represión*, Néstor Kirchner, el presidente inesperado, propuso una fórmula viable y atractiva que combinaba el reciente progresismo latinoamericano con apelaciones tradicionales (pragmatismo político, concentración de poder, subordinación de los actores al líder, entre otros), en un contexto económico favorable. Cabe observar retrospectivamente que, desde el retorno a la institucionalidad democrática, en 1983, el peronismo gobernó 20 sobre 28 años, y ha sido sucesivamente neoli-

beral, en los 90, bajo las dos gestiones de Carlos Menem; progresista y tendencialmente nacional-popular, desde 2003, con Néstor Kirchner como presidente, y exacerbadamente nacional-popular desde 2008, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Como afirma Juan Carlos Torre (1999), en realidad, el peronismo "es un sistema político en sí mismo", pues reúne a la vez gobierno y oposición. Esta dinámica fue ilustrada en octubre de 2011, cuando el conjunto de candidatos que se reivindican peronistas totalizaron el 70% de los votos válidos, mientras que el 54% votó por la reelección de Cristina Fernández de Kirchner. Este fenómeno tiene su contracara también en la creciente división de la oposición, tanto dentro del peronismo más conservador, de los sectores de derecha, como en la volatilidad de los proyectos alternativos de centro izquierda. En 2011, el único triunfo que la oposición pudo mostrar como incontestable fue la reelección del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires (Mauricio Macri), quien se perfila como el candidato de derecha para las elecciones de 2015 en las que finalmente triunfaría, abriendo a un nuevo ciclo político.

Por primera vez en la historia argentina el partido peronista (en su versión kirchnerista) gobernó por 12 años consecutivos, algo que ni el mismísimo Juan D. Perón pudo realizar, ya que gobernó entre 1946 y 1955, año en el que fue derrocado por un golpe militar. Mucho menos podía esperarse tal continuidad en los años 70, cuando la inestabilidad institucional y la violencia política eran parte del clima de época.

Nuevamente, y mucho más que otros populismos latinoamericanos, el peronismo probó ser capaz de contener las más diversas corrientes político-ideológicas en su seno, así como volvió a dar pruebas de una gran productividad política. No es extraño entonces que, debido a una combinación de lógica política y estrategia adaptativa, propia de la amplitud y la plasticidad de su marco ideológico, las mismas personas que fueron fervorosamente neoliberales en una etapa, pudieran devenir nacional-populares en la siguiente. Con los años, el éxito económico del gobierno y la posterior ampliación de un sistema de alianzas en clave nacional-popular (no solo desde el sindicalismo tradicional, sino también desde el ámbito de la cultura y la educación, y la nueva militancia política juvenil), con la consiguiente reducción y simplificación del espacio político, terminaron por ensanchar las espaldas del proyecto político gubernamental, con ingentes bases provenientes de

las clases medias urbanas. Asimismo, por primera vez en su historia, desde el poder, el peronismo parecería superar la oposición entre pueblo y cultura, entre masas e intelectuales, que tanto ha sobrevolado como maldición sobre anteriores experiencias nacional-populares.

Sin embargo, durante los últimos años del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, asistimos a una reducción de las alianzas sociales (sobre todo, luego de la ruptura con el ala sindical representada por Moyano) y a un encapsulamiento cada vez mayor del gobierno de la Presidenta sobre sus bases juveniles y profesionales provenientes de las clases medias. Más aún, las nuevas movilizaciones masivas, también protagonizadas por sectores de la clase media urbana, muestran de modo elocuente la puja ideológica entre diferentes sectores de las clases medias: si desde el gobierno estos sectores medios se arrogan el monopolio del “progresismo” y la representación de las clases subalternas, en nombre de “un modelo de inclusión social”, desde la oposición los sectores medios movilizadores critican el creciente autoritarismo del régimen, y hablan en nombre de “la república amenazada”<sup>93</sup>. En el orden de “los populismos realmente existentes”, la actualización de lo nacional-popular, realizada a través de la profundización de los antagonismos y la activación de estructuras de inteligibilidad binarias, se halla más cerca de las clásicas versiones organicistas de la hegemonía, que de una visión pluralista. No obstante, aunque la matriz nacional popular puede reclamar hegemonía (asentada sobre todo en una construcción cultural-mediática), se muestra incapaz de aglutinar y contener todos los frentes de conflicto y todas las formas de expresión de lo popular. La explosión de una conflictividad ligada a las políticas de mercantilización de las tierras, donde se mezclan fenómenos como la concentración de la tierra, la expansión del agronegocio, la minería transnacional y el *fracking*, revelan algo más que el costado “débil” del gobierno: en realidad, estas políticas forman parte del sistema de dominación; son sostenidas y promovidas desde el Estado nacional y marcaron la profundización de una lógica de desposesión (Harvey, 2004)<sup>94</sup>, en una perturbadora continuidad con lo sucedido en los 90.

<sup>93</sup> Referimos a las demandas por ‘republicanismo’ que se vieron durante las protestas contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Ver Svampa 2012.

<sup>94</sup> Retomando la perspectiva de R. Luxemburgo, desarrollada por Harvey, distinguimos dos fases diferentes –aunque interconectadas– de acumulación del capital: aquella que

¿Es posible, sin embargo, la coexistencia tan flagrante entre, por un lado, una política que se invoca como nacional-popular y por el otro, la profundización de una dinámica de desposesión? Desde nuestra perspectiva, no es solo una cuestión de tasas de crecimiento económico (esto es, de “éxito económico” del modelo). Una particularidad que afianza la construcción hegemónica es que, en el campo de las luchas, la coexistencia entre modelos de desarrollo diferentes (industrial; agronegocio/minero) se expresa a través de una gran desconexión: así, existen pocos puentes entre las actuales luchas sindicales y las disputas por la tierra y el territorio. Uno de los factores que agrava la desconexión es la acentuación de una retórica nacional popular, acoplada con un imaginario desarrollista, que acentúa la incomprensión hacia aquellos sectores que cuestionan los modelos mineros y el de agronegocio. En este marco, no es casual que los sectores intelectuales kirchneristas y la nueva juventud política militante han tendido a mantener “blindado” el discurso frente al carácter nodal de estas problemáticas, negando la responsabilidad gubernamental respecto de la lógica de desposesión que caracteriza a determinadas políticas de Estado, y subrayan, en contraste, el peso de las políticas sociales y la revitalización de institutos laborales, como la negociación colectiva, entre otros.

En enero de 2012 se produjo la pueblada de Famatina, una pequeña localidad de la provincia de La Rioja, lo cual ayudó a visibilizar a nivel nacional las luchas contra la megaminería transnacional, que vienen desarrollándose desde 2003. A la hora de abordar la cuestión, la presidenta dejó en claro que la megaminería es una parte fundamental y estratégica del modelo de gobierno. Las luchas contra la megaminería volvieron a su registro habitual, esto es, el de la lógica criminalizadora de las provincias, que para el año 2012 marcó un claro récord, sobre todo en la provincia de Catamarca (siete represiones en siete meses). Pese a ello, la pueblada de Famatina tuvo un efecto político y simbólico mayor, pues puso al desnudo la alianza del gobierno nacional con las grandes corporaciones.

enfrenta de modo asimétrico capital y trabajo, ligada a los procesos de reproducción ampliada y la extracción de plusvalía, del cual el capital industrial es el ejemplo paradigmático, y aquella fase de acumulación por desposesión, que da cuenta de la expansión del capital hacia nuevos territorios y formas de vida. Ésto fue identificado por el propio Marx como la llamada “acumulación primitiva”, identificado por Harvey como uno de los núcleos centrales de la acumulación capitalista contemporánea.

Algo similar sucedió con la tragedia ferroviaria en la Estación de Once, en febrero de 2012: el hecho, que costó la vida de 51 personas, puso de manifiesto que la precariedad no es un tema del pasado neoliberal y que los subsidios millonarios no hacen más que apuntalar las ganancias de los empresarios, muchos de ellos, amigos y socios del gobierno, con total desprecio por la vida de los usuarios.

Otro punto de actualidad donde naufraga el discurso oficial sobre las corporaciones aparece cuando hablamos de la expansión de la frontera agropecuaria. Recientemente, la Comunidad Primavera de los Qom, que mantiene un largo litigio por la titularidad de sus tierras en Chaco y Formosa, volvió a ser noticia fúnebre: entre diciembre de 2012 y enero de 2013, cuatro integrantes de esta comunidad fueron muertos en circunstancias más que sospechosas, frente a la indiferencia del gobierno nacional.

Por otro lado, en mayo de 2012, el gobierno expropió el 51% de las acciones de YPF, en manos de la empresa española de YPF. Aunque se habló de modo grandilocuente de renacionalización, en julio de 2013 el gobierno anunció un acuerdo con la compañía americana Chevron (la cual, fue condenada por graves delitos ambientales y violación de derechos indígenas, en Ecuador, cuando era Texaco), que le otorga a ésta grandes exenciones y beneficios, en la explotación de hidrocarburos no convencionales (shale gas y shale oil), en la Cuenca del Neuquén. El hecho suscitó numerosas críticas y protestas, muy especialmente, de las comunidades indígenas mapuches. Pero el gobierno no abrió una discusión sobre el *fracking*; todo lo contrario, se avanzó la implementación de una técnica controversial de manera ciega e imprudente, como ya había sucedido con la soja y la megaminería, con lo cual la Argentina se prestó a sumar nuevos conflictos territoriales y socio-ambientales.

Durante los últimos dos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la coexistencia entre dinámica nacional-popular y acentuación de la lógica de desposesión se agravó, lo cual colocó a la Argentina en una situación frágil y peligrosa. Asistimos a la apertura de un nuevo ciclo de violación de derechos humanos individuales y colectivos, íntimamente asociados al fenómeno de desposesión, incentivado y promovido por políticas públicas nacionales y provinciales. En tan solo cinco años –entre el 2008 y el 2013– hubo doce asesinatos y

muertes dudosas de indígenas y campesinos, varias de ellas catalogadas como “accidentes” por las autoridades. Los cambios en las formas de la represión provocaron un creciente proceso de tercerización de la violencia (policías provinciales, grupos de choque, sicarios impulsados por propietarios sójeros y latifundistas) (Aranda, 2013). Hubo, como tal, una clara responsabilidad del gobierno nacional, cuyo sistema de mediaciones y entramados de poder apareció por lo general desdibujado y que los hechos de represión tendieron a iluminar de manera dramática.

Está por verse qué pasos seguirá la nueva juventud militante frente a la dimensión conflictiva que cobre el avance de la dinámica de desposesión y qué capacidad de absorción y neutralización de las disputas (sociales, políticas y económicas). El escenario actual, atravesado de conflictos y la sucesión futura dentro del peronismo, abren así nuevos interrogantes sobre el devenir de lo nacional-popular en la Argentina.

## Bibliografía

- James Anaya, “La situación de los pueblos indígenas en Argentina”, Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, Consejo de Derechos Humanos, ONU, julio de 2012, <http://salinasgrandes.org/wp-content/uploads/2012/07/informe-relator.pdf>.
- Darío Aranda, “La década extractiva”, 2013 <http://www.comambiental.com.ar/2013/05/la-decada-extractiva.html>.
- Martín Armelino, “Syndicats et politics sous les gouvernements kirchneristes”, en *Problèmes d'Amérique Latine*, nro 82, 2011.
- Daniel Azpiazu y Martín Schorr: *Hecho en Argentina. Industria y economía, 1976-2007*, (Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2010).
- Martin Bergel, “En torno al ‘autonomismo argentino’”, en Darío Vive, portal latinoamericano de crítica social y pensamiento plebeyo, 2007 [www.dariovive.org/notas/berguel1.html](http://www.dariovive.org/notas/berguel1.html)
- Christian Boyanovsky, *El aluvión. Del piquete al gobierno. Los movimientos sociales y el kirchnerismo*, Sudamericana, Buenos Aires, 2010.
- Antonio Gramsci: *La política y el Estado moderno*, (Planeta-Agostini, Buenos Aires, 1971).

Daniel Ozarow, Cara Levey, Christopher Wylde (Compiladores)

Emilio de Ípola y Juan Carlos Portantiero: "Lo nacional-popular y los nacionalismos realmente existentes" in Carlos Vilas (editor): *La democratización fundamental. El populismo en América Latina*, Conaculta, México, df, 1994.

Michael Hardt y Antonio Negri, *Multitude: War and Democracy in the Age of Empire*, (New York: Penguin Books, 2004).

David Harvey, "El nuevo imperialismo: Acumulación por desposesión", *Socialist Register*, 2004, [bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/social/harvey.pdf](http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/social/harvey.pdf)

Guillermo O' Donnell, "Delegative Democracy", *Journal of Democracy*, 5:1, (1994), 55-69.

Maristella Svampa, "Pensar el Desarrollo en América Latina", en G. Massuh (editora) *Renunciar al bien común. Extractivismo y (post)desarrollo en América Latina*, Buenos Aires, Mardulce, 2012.

----- "Consenso de los Commodities y Lenguajes de Valoración en América Latina, en *Nueva Sociedad* No 244, marzo-abril de 2013.

----- "Tras la lecturas y las huellas de diciembre de 2001", en Jornadas de debate "Diez años: 2001-2011", 1 y 2 de diciembre de 2011, organizadas por GEPSAC (UBA), UNGS y UNSAM., Argentina, 2011.

----- "1973-1976. El Populismo imposible y sus actores", en *Nueva Historia Argentina, 1955-1976*, volumen IX, dirigido por Daniel James, Buenos Aires, Sudamericana, 2003.

Juan Carlos Torre "Los desafíos de la oposición en un gobierno peronista" en J.C. Torre et al.: *Entre el abismo y la ilusión. Peronismo, democracia y mercado*, Grupo Editorial Norma, Buenos Aires, 1999.

Melina Vásquez. "Socialización política y activismo. Carreras de militancia política de jóvenes referentes de un movimiento de trabajadores desocupados", tesis de doctorado en Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA).

### TERCERA PARTE

## RESPUESTAS CULTURALES Y MEDIÁTICAS A LA CRISIS DE 2001